ATLÁNTICAS – Revista Internacional de Estudios Feministas, 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736 https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

Una Constitución para la humanidad fundamentada en la igualdad de mujeres y hombres

One Constitution for humanity based on the equality of women and men

Asunción Ventura Franch

Recibido: 14/01/2025
Aceptado: 18/06/2025

RESUMEN

El debate jurídico político alrededor de la globalización, la necesidad de un Estado mundial y una constitución para la humanidad hace necesario introducir una reflexión acerca de la igualdad de mujeres y hombres en esa futura y necesaria constitución, para así poder establecer el reconocimiento de las mujeres como sujetos constitucionales, intentando con ello superar esta deficiencia existente en las constituciones de los actuales Estados, que ha dificultado la consecución de la igualdad de las mujeres. El constitucionalismo cosmopolita requiere de unas propuestas omnicomprensivas de mujeres y hombres en relación a la dignidad de la persona, los derechos humanos y el entramado institucional para su garantía. La normativa de las Naciones Unidas respecto a la igualdad y no discriminación de las mujeres puede resultar una propuesta importante para la teorización del constitucionalismo global.

Palabras clave: igualdad de mujeres y hombres; globalización; estado; constitución y derechos humanos.

Asunción Ventura Franch, profesora titular de derecho constitucional de la Universitat Jaume I y Consellera emérita del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Ha desarrollado una investigación vinculada al Derecho Constitucional y orientada a la igualdad en la teoría constitucional, derechos fundamentales y poder político desde una perspectiva feminista. ORCID: 0000-0003-2438-7943

Cómo citar este artículo: Ventura Franch, Asunción (2023). Una Constitución para la humanidad fundamentada en la igualdad de mujeres y hombres. *Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas*, 10 (2), 2-35. doi: https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

ABSTRACT

The political legal debate around globalization, the need for a world State and a constitution for humanity makes it necessary to introduce a reflection on the equality of women and men in this future and necessary constitution, in order to establish the recognition of women as constitutional subjects, thereby trying to overcome this deficiency existing in the constitutions of the current States, which has made it difficult to achieve equality for women. Cosmopolitan constitutionalism requires comprehensive proposals from women and men in relation to the dignity of the person, human rights and the institutional framework to guarantee them. The United Nations regulations regarding equality and non-discrimination of women can be an important proposal for the theorization of global constitutionalism.

Keywords: equality of woman and men; globalization; state; constitution and human rights.

1. INTRODUCCIÓN

La situación de los hombres y las mujeres en el mundo dista mucho de desarrollarse en condiciones de igualdad porque siguen existiendo condiciones de desigualdad que propician la discriminación y la violencia contra las mujeres. En los índices de igualdad referenciados en Naciones Unidas las mujeres siguen estando en condiciones de desigualdad en todos los países del mundo.

En la actualidad existe un debate cada vez más intenso sobre la globalización y sus consecuencias debido a la incapacidad competencial de los Estados para adoptar políticas más allá de sus fronteras; esta dificultad también se muestra en ámbitos de grandes organizaciones de estados como la Unión Europea. La economía, la información, la tecnología e incluso las costumbres y el imaginario colectivo se van globalizando, pero no existe un poder político global capaz de armonizarlo, lo que nos retrotrae a una concepción mínima de la democracia a la vez que a la pérdida de derechos.

Existen diferentes posiciones en la doctrina constitucional acerca de la necesidad de una Constitución que ordene un Estado mundial y garantice derechos y

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

también establezca obligaciones. En esta idea de teorizar acerca de una constitución global uno de los aspectos que nos parece más relevante es no reproducir los errores de las constituciones de los Estados, y proponer, de acuerdo con la teoría critica feminista, una revisión de los sujetos de esa nueva constitución y las consecuencias que comportaría para el desarrollo de un texto constitucional para la humanidad. La introducción de dos sujetos constitucionales supondría un cambio fundamental en el contenido de una constitución global afectando sobre todo a los derechos, al tener que introducir nuevos derechos vinculados a la actividad que han desarrollado de forma mayoritaria las mujeres, esto es la mitad de la humanidad; pero también comportaría la revisión de alguno de los derechos ya consolidados, como el derecho a una vida digna, que de acuerdo con estos planteamientos debería contemplarse como libre de violencia de género. Y qué duda cabe que otra de las consecuencias de la incorporación de las mujeres como sujetos constitucionales está vinculada a la paridad y consecuentemente a la democracia paritaria, que tiene que garantizarse en las instituciones, organizaciones y en la sociedad de manera transversal.

Todo ello, no resulta totalmente nuevo ni extraño al actual orden mundial dado que existe una normativa internacional sobre derechos humanos, igualdad y no discriminación, contra la violencia de género y algunas convenciones sobre los cuidados que pueden servir de base para una futura constitución a la vez deseable para la humanidad.

2. LA EXCLUSIÓN DE LAS MUJERES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

Establecer la relación entre derecho constitucional y las mujeres puede parecer un ejercicio innecesario, en la medida que hasta época relativamente reciente no se ha producido conexión entre ambos. Sin embargo, esta apreciación no resulta exacta por cuanto se puede afirmar que desde el inicio del movimiento

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

constitucional el sexo ha estado presente en los debates constitucionales (Lovenduski, 1997, p.201). Los debates giraban alrededor de la inclusión o exclusión de las mujeres en la consideración como ciudadanas y la misma constatación de la existencia de estos debates confirma su exclusión de los textos constitucionales.

Cuando se habla del Estado, en la acepción actual de estado democrático, se hace alusión a una organización política en la que cabe la participación de todos los ciudadanos, incluidas las ciudadanas, no existiendo por tanto exclusiones *a priori*. Al no existir, formalmente, obstáculos la no participación de las mujeres califica de acto voluntario, de una autoexclusión, lo que conduce a la afirmación de que las mujeres no participan porque no quieren, ya que el Estado, en principio, no las discrimina.

Sin embargo, los estudios desde la perspectiva de género reflejan lo contrario (Esquembre, 2016, p.188): que el Estado no facilita la participación, y que además todos los mecanismos de participación, partidos políticos y leyes electorales tienen un sesgo en favor de los hombres.

Si realizamos un recorrido histórico se puede afirmar que las mujeres han sido siempre excluidas del ámbito público y si bien esto no tiene una explicación razonable, al menos, en algunos momentos históricos tienen más justificación que en otros. A tal efecto nos servimos de la diferencia entre lo que se ha denominado estado preconstitucional y estado constitucional. Se entiende así por estado constitucional aquel cuyo fundamento del poder político está en el consentimiento de la ciudadanía, traducido en lo que es la propia constitución del Estado, norma básica que lo estructura, organiza, reconoce derechos fundamentales de la ciudadanía y establece mecanismos para su protección.

Sin embargo, en el Estado preconstitucional, por contra, no existe un fundamento político del poder, es un poder constituido que tiene un origen fuera de la

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

voluntad de los hombres: o bien el rey es la encarnación de Dios en la tierra, o el poder del rey tiene un origen divino. El origen del poder no se cuestiona, es algo que no depende de la voluntad de la ciudadanía. Este poder de origen divino se adquiere por pertenecer a una familia determinada; por lo tanto, el poder va a depender del hecho del nacimiento. Desde esta perspectiva, resulta más fácil justificar la exclusión de las mujeres del poder político. En el estado preconstitucional no se cuestiona el poder, es algo «natural», simplemente se regula a través de la herencia, y se adquiere por el hecho del nacimiento.

En el estado preconstitucional la no participación de las mujeres es añadir otra exclusión más a las ya existentes. El sexo va a ser un motivo de exclusión de la vida pública. Las mujeres, aunque pertenezcan a la clase o estamento social que sí que tiene acceso al poder siempre serán las últimas; en cualquier estamento y en cualquier clase social, por debajo de un hombre habrá siempre una mujer y para tener acceso al mundo público siempre estará antes el hombre que la mujer. El movimiento constitucional y los principios ilustrados rompen con esa concepción del origen del poder, que ya no es divino, sino que pasa a ser un acto voluntario del ciudadano. Los ciudadanos, en ejercicio de su libertad y bajo el presupuesto de la igualdad, pactan cual es la forma de organización. El nacimiento ya no será una condición para el acceso al poder; los hombres son libres e iguales para darse un poder, acuerdo que se plasma en el "Pacto Social", ficción que se utiliza para explicar el origen del poder y del Estado.

El sujeto del pacto tiene un perfil condicionado por el sexo y así los filósofos que teorizan acerca de este nuevo Estado se esfuerzan por excluir a las mujeres, situándolas en el estado de naturaleza (Amorós, 2004, p. 125), fuera del pacto fundacional de estado.

Estos planteamientos, son cuestionados por Mary Wollstonecraft (1994, p.37) por su inconsistencia, en tanto en cuanto afirman que el origen de las mujeres es

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

diferente al de los hombres, pero no explican cual es. Esta autora acepta que existen diferencias entre los hombres y las mujeres, situando su origen en la educación que se da a las mujeres, sustrayéndolas del estado de naturaleza. Las mujeres no son tontas por naturaleza, no sufren una minusvalía por haber nacido mujeres, porque eso significaría que se va en contra de los principios preconizados por la Revolución, basados en la razón. Es decir, el hombre por medio de la razón puede modificar el medio, puede hacerlo todo; negarles esta posibilidad a las mujeres es lo mismo que afirmar que ellas carecen de razón, y de esta manera la razón se identifica con el sexo.

El sexo se convierte en una diferencia política; y la exclusión de las mujeres del pacto y, por tanto, del Estado no puede justificarse racionalmente, porque es la propia naturaleza la que establece esta diferencia.

Estos planteamientos, comportaron el desaprovechamiento de un cambio histórico, de suma relevancia, que hubiera posibilitado la transformación de los paradigmas que impedían la participación política de las mujeres, y que analizado desde la actualidad se puede considerar una pérdida histórica, cuyas consecuencias todavía perduran.

La teorización que se hace sobre la exclusión de las mujeres del poder político llega hasta nuestros días. En los Estados actuales, fruto de la teorización de lo que es un poder constituido a partir de la propia voluntad de los hombres, todavía se arrastra lo que ha sido la exclusión de las mujeres de la participación política; nadie explica las razones, pero se ve como algo muy natural que las mujeres no participen en política.

Todas las formas de organización política que han existido a través de la historia han sido precedentes del Estado actual. Si analizamos las razones por las que también se excluye a las mujeres en ese momento histórico, en el que se daban

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

las condiciones para producir el salto a un cambio de sociedad, de planteamiento político, hemos de concluir que sin duda era el momento adecuado para la eliminación de barreras, la mujer hubiera podido ser sujeto activo de ese nuevo Estado. Se afirma (Pateman, 1995, p. 76) que antes que eso ocurriera, ya se había producido un "pacto sexual" entre los hombres y las mujeres, por el que las mujeres habían cedido su libertad e igualdad a cambio de su seguridad, teoría que explica, desde otra perspectiva, porqué las mujeres no participaron de ese momento de cambio. Sí las mujeres no hubieran estado sometidas por un pacto anterior, no se entiende su no participación en el poder. La exclusión de las mujeres en el nacimiento del nuevo Estado es un tema que se arrastra hasta los estados actuales: no se sabe bien porqué, pero todos los Estados excluyen a las mujeres, no porque formalmente así lo digan los pactos constitucionales sino por la herencia de una situación que, amparándose en razones naturales, ha creado una serie de mecanismos y comportamientos que implican que en igualdad de condiciones las mujeres no tengan el mismo acceso que los hombres al poder.

No obstante, las mujeres no aceptaron pacíficamente esa exclusión: es interesante destacar la posición que el movimiento de mujeres que surge en la Revolución Francesa tuvo en estos acontecimientos. Algunas formaban parte de la clase que se adueñó del poder, la burguesía, y tenían una posición política importante; otras formaban parte de la elite cultural, lo que les permitió establecer en sus casas foros de debate a los que acudían los hombres importantes. Con la aprobación de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la que se reconocen los derechos de los ciudadanos, las mujeres pensaban que ellas también ostentaban la condición de ciudadanas porque de una u otra forma habían participado en el cambio social que permitió el establecimiento de derechos. Pero es en ese momento donde se muestra el fracaso del movimiento de las mujeres francesas que, por otra parte, se puede calificar como un movimiento político en la medida que cuestiona la propia génesis del Estado. La reivindicación de las revolucionarias francesas consiste en estar en igualdad de

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

condiciones con los hombres para establecer ese pacto que organizará el Estado y el poder político.

Esas mujeres, ven frustradas sus peticiones y por ello, dos años más tarde, se formula la Declaración de la Mujeres y las Ciudadanas, al comprobar que el triunfo de la Revolución comportaba su exclusión de las proclamas revolucionarias. Mientras los revolucionarios se organizaban contra el poder establecido no había problemas, se aceptaba la presencia de mujeres; pero cuando se instaura el nuevo Estado las mujeres son relegadas y pasan a tener la misma condición que tenían antes de la Revolución. Esto hace que, en septiembre de 1791, Olympe de Gouges, realice la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, al ser consciente de su exclusión, y reclama la igualdad con los hombres, porque considera que ellas también nacen libres e iguales, debiendo formar parte de esa organización política sin ninguna diferencia.

La contestación de la Revolución a esta petición es guillotinar a Olympe de Gouges (Alonso y Belinchón, 1989, p.31) después de haberla desprestigiado públicamente, porque a las mujeres no se las puede rebatir con argumentos políticos, dado que se considera que carecen de capacidad política, se les ataca por su conducta personal. Establecer un debate político y una confrontación de los derechos propuestos en la Declaración de la Mujer y la Ciudadana significaba, de alguna manera, reconocerles la condición de ser un igual, y lo que es: peor atribuirle capacidad política; por ello cuestionaron su conducta personal que es la única que se consideraba que pueden tener las mujeres.

Esta exclusión se ha ido atenuando; pero la raíz de la diferencia no se puede situar en las sociedades primitivas, sino en ese momento político, es decir, en la constitución del Estado por hombres libres e iguales que excluyen a las mujeres. Es cierto; que a la par se dan otras exclusiones, como la de las personas racializadas las que carecen de ciertas capacidades; en tales casos el sufragio y la

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

participación política también están inicialmente vetados a algunos hombres; pero la propia evolución del Estado hace que todas esas otras diferencias se eliminen y quede, casi exclusivamente, la marginación de las mujeres. Algunas autoras (Rubio, 2006, p.28-29; y Esquembre, 2018, p.107) señalan que todos los hombres formaban parte del poder constituyente, todos los varones son llamados en origen a la conformación de la ley; el que algunos fueran excluidos de la representación parlamentaria no implicaba una barrera definitiva: serán las leyes electorales las que excluyen a algunos por razones económicas, de capacidad o de color pero como hombres forman parte del pacto político y por ello resultó más fácil su integración en las sociedades democráticas.

La ampliación democrática del Estado no abarca a las mujeres. La lucha por el derecho de sufragio va a ser otro de los momentos históricos en los que se vuelven a esgrimir todos los argumentos que ya los teóricos del estado liberal utilizaron para la exclusión de las mujeres. A pesar de haber transcurrido varios siglos desde la reclamación de los mismos derechos y de la participación en la constitución del poder político todavía existen diferencias entre mujeres y hombres en todos los Estados del mundo.

3. FEMINISMO Y ESTADO

Que las mujeres no han participado en la creación de los actuales Estados constitucionales parece un hecho irrefutable; cuestión diferente es cómo la teoría feminista establece el debate sobre el Estado constitucional.

Si el objeto del derecho constitucional es el Estado, la cuestión a debatir sería como se sitúa el feminismo ante el Estado. Existe una cierta unanimidad en que el feminismo no tiene una teoría del estado. Catharine A. Mackinnon así lo afirma: "el feminismo no tiene una teoría del Estado y no ha revisado en sus propios términos, la relación entre el Estado y la sociedad dentro de una teoría de la determinación social específica del sexo" (1995, p.283). En realidad, las

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

posiciones dentro del feminismo se han fijado en diferentes elementos del Estado, pero no en su globalidad, a la vez que mantienen posiciones distintas.

En la literatura feminista se pueden encontrar varios paradigmas que van desde la posición mantenida por Mackinnon, que señala que la práctica feminista ha oscilado entre una teoría liberal y una teoría izquierdista del Estado, hasta Joni Lovenduski (2005, p.209-242), que señala cinco paradigmas: la visión liberal, el paradigma radical, el marxista-feminista, los sistemas duales y la visión posestructuralista. Pero ninguna de ellas ofrece una caracterización del papel del estado desde una perspectiva de género.

El feminismo ha descrito parte del tratamiento que el Estado da a la diferencia entre géneros, pero no ha analizado el papel del Estado en la jerarquía de los géneros; ni el liberalismo ni el marxismo reconocen a la mujer, como tal, una relación específica con el Estado.

Mackinnon (1995, p.428) afirma que el Estado es masculino desde el punto de vista de la jurisprudencia, y esto significa que adopta el punto de vista del poder masculino en la relación entre ley y sociedad. Esta postura es especialmente patente en la decisión constitucional que se considera legítima en la medida en que es neutra en cuanto al contenido político de la legislación. El fundamento de esta supuesta neutralidad se sustenta en la consideración generalizada de que las condiciones que incumben a los hombres por razón del género son también aplicables a las mujeres; es decir, es el supuesto de que en realidad no existe en la sociedad desigualdad entre los sexos. La Constitución, el documento en que se basa esta sociedad estatal, asume con sus interpretaciones que la sociedad, en ausencia de la intervención del gobierno, es libre e igual, que sus leyes, en general, lo reflejan y que el gobierno debe corregir sólo lo que antes ha equivocado.

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

Los hombres son el grupo que ha tenido autoridad para hacer las leyes encaramando en la "regla del reconocimiento" que es, en realidad, lo que confiere autoridad a la ley. Los valores claramente masculinos (y los hombres) constituyen la comunidad interpretativa autorizada que hace la ley aparentemente legal. El poder estatal, encarnado en la ley, existe en todas las sociedades como poder masculino al mismo tiempo que el poder de los hombres sobre las mujeres se da en toda sociedad organizada como poder del Estado. Tal vez no haber considerado el género como determinante de la conducta estatal haya hecho que la conducta del Estado parezca indeterminada.

La organización política de las sociedades, incluida la democrática, se ha construido sin las mujeres; su estructura y valores responden a formas y valores masculinos. La incorporación formal de las mujeres a esa organización se ha hecho mucho más tarde y sin modificar su contenido y estructura. La concesión del voto femenino formalizó la entrada de las mujeres en lo que antes se consideraba propio de los hombres. En las sociedades actuales, los derechos que antes eran del hombre pasan a ser también derechos de la mujer. Para ello se realiza una operación sencilla: donde antes decía "hombre" ahora también, pero se afirma que en la actualidad "hombre" comprende a todo el género humano. Se pretende que este nuevo sujeto transformado con apariencia de neutralidad no es varón ni mujer sino las dos cosas a la vez y sirve para designar a cualquiera de los dos. Pero este sujeto, "hombre", "todos", "personas", que reflejan los textos constitucionales, se identifica en la práctica con el sujeto varón, dado que el sujeto mujer únicamente ha sido incluida formalmente; para una inclusión real se tendría que haber reelaborado el concepto "hombre" introduciendo esa visión omnicomprensiva de las funciones sociales y valores que representan a cada uno de ellos y que tienen relevancia para el orden constitucional. La realidad ha mostrado la inoperancia de esta inclusión meramente formal.

Si revisamos la aplicación de las constituciones observamos que, con respecto a

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

la parte orgánica, todos los órganos constitucionales están compuestos mayoritariamente por hombres, salvo aquellos países en los que existe una obligación legal de cumplir con la paridad o la presencia equilibrada. Incluso, en alguno de ellos se da la paradoja de que nunca ha incorporado a una mujer. Si revisamos la parte dogmática ocurre otro tanto: los derechos de libertad, los derechos de participación y los económicos y sociales se sitúan, fundamentalmente, en el ámbito público, en el que los varones son los habitantes mayoritariamente, con algunas excepciones. Si nos atenemos a la protección de los derechos, quienes accionan los mecanismos de protección son, la mayoría de las veces, varones porque en realidad están pensados para ellos. Es lógico que así sea, si se establecieran derechos en el ámbito privado, de los cuidados, los mecanismos de protección seguramente serían accionados por las mujeres, en cuanto que son las que mayoritariamente están en este ámbito.

Sólo si los derechos y los órganos constitucionales fueran una concreción de los principios y valores que inspiran una constitución democrática desde la idea omnicomprensiva de los dos sujetos en que se compone la sociedad se podría hablar de la mujer como sujeto constitucional. Mientras la situación de las mujeres se tenga que resolver a través de la interpretación de los principios y valores que inspiran una constitución democrática se estará en una situación de precariedad, al socaire de corrientes ideológicas, de coyunturas económicas, de intereses particulares y de grupos y, cómo no, de la presión que ejerce continuamente el sistema patriarcal. Con estas corrientes tan desfavorables, si no se realiza una apuesta importante por parte de los poderes públicos para cambiar el rumbo de las cosas el fracaso está servido; pero no solo el fracaso de las mujeres, sino el fracaso del sistema democrático. Un sistema político que solo es capaz de integrar, regular y ordenar la vida de la mitad, como mucho, de los miembros de una sociedad, es un sistema que no funciona. Habría que preguntarse si es el sistema democrático el que no funciona o, por el contrario, es el sistema patriarcal el que impide que funcione el sistema democrático. La

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

respuesta no resulta del todo fácil; son sistemas superpuestos y determinar donde comienza uno y acaba el otro es complicado. Cualquier análisis que se realice tanto del Estado como del derecho constitucional debería estar presidido por esta idea omnicomprensiva de los dos sujetos.

El nacimiento de un nuevo Estado debería incluir la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres a la vez que integrar todos los aspectos relacionados con la mitad de la humanidad que no han sido recogidos en las constituciones Estatales.

En este sentido Arantza Campos (2020, p.47-48) afirma que: "la revisión del Estado Constitucional al igual que el Derecho será calificado desde los distintos enfoques feministas como sexista, masculino y que tiene y crea género por lo que la teoría feminista considera imprescindible que en el Estado Constitucional se debe producir un nuevo "Pacto", el de la Democracia paritaria que propone una nueva concepción de la "universalidad" no androcéntrica que incluya a las mujeres".

4. GLOBALIZACIÓN Y EROSIÓN DEL ESTADO SOCIAL

La trayectoria seguida por el derecho constitucional desde su creación en el Estado moderno, adaptando y transformando los postulados sobre los que sustenta toda la arquitectura constitucional, no le inmuniza acerca de los nuevos cambios que se han producido con la mundialización de la política condicionada a su vez por la mundialización de la economía.

Paralelamente a esta eclosión universalizadora del mercado algunos acontecimientos han contribuido de manera fundamental a la uniformización de comportamientos, cambiando de diversas formas no solo el tejido social global sino también el imaginario colectivo (Cobo, 2010, p.267).

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

Esta globalización influye en el estado social (Figueruelo, 2017, p.96) que de alguna manera íntegra democracia y mercado y que garantizaba el papel del Estado en la redistribución económica. La influencia y capacidad del papel del Estado en la organización del estado del bienestar se agudiza por la internacionalización de la economía y por su alejamiento de los estados nacionales.

Uno de los acontecimientos que se señalan como propiciadores de esa nueva mundialización son los movimientos migratorios que en estos años se han incrementado sobre todo desde los países en vías de desarrollo hacía los países desarrollados. Pero quizá el acontecimiento que más ha influido en ese aspecto sea el avance de las tecnologías de la información, el acceso a Internet y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (García Marzá y Calvo, 2024, p.26).

La globalización económica crea un abismo cada vez más profundo entre las competencias estatales y los sistemas reales de producción y distribución de bienes, por lo que se reduce la capacidad de maniobra de los gobiernos, obligados a seguir criterios económicos globales. Sin embargo, el espectacular ensanchamiento de los espacios económicos y sociales no se ha visto acompañado de una similar amplitud de los espacios políticos (De Vega, 1998, p.14).

La globalización se nos presenta como la renuncia a la autonomía del estado o el estado autónomo para dictar sus propias leyes y controlar los procesos políticos, económicos e incluso sociales, como la pérdida de control democrático de aquella parte de la economía necesaria para llevar a cabo la justicia social. Cualquier intento significativo de recuperar una economía política nacional se entendería, sin duda, como un bloqueo proteccionista. Sólo el mercado tiene en la actualidad el protagonismo y, como todos conocemos, nada sabe ni quiere saber acerca de los derechos sociales (Habermas, 1999, p.157).

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

La globalización tiene como consecuencia la ruptura existente entre derechos, participación política y justicia social. Parece que los derechos se reducen, de nuevo, a los denominados «civiles», necesarios para la realización de contratos, y a aquellos derechos políticos que son imprescindibles dentro de un concepto mínimo de democracia, como soporte básico del mercado (García-Marzá, 1994, p.41).

El escenario de la globalización parece retrotraernos a una concepción mínima de la democracia y por tanto a una reconsideración del estado social. Las condiciones de participación en las deliberaciones y decisiones políticas, económicas y sociales quedan reducidas y de ninguna forma aseguran la igualdad y la reciprocidad que toda participación requiere (Habermas, 1999, p.102).

La aceptación de la globalización como una cuestión irreversible no significa que se trate de un fenómeno natural sobre el que no cabe ningún tipo de intervención que pueda modificar su potencial; el proceso de globalización ha sido modelado por las tecnologías y la difusión cultural, así como por las decisiones de los gobiernos de liberar y desregular sus economías nacionales (Beck,1998, p.16).

La expansión de las relaciones producto de la globalización no se circunscribe al ámbito estrictamente económico, sino que afecta a múltiples esferas de la actividad humana. En realidad estamos en presencia de un nuevo escenario formado por una red de relaciones que atraviesan las fronteras nacionales y que interrelacionan cuestiones nacionales, regionales y supraestatales, en el que casi se puede afirmar que se trata de una sociedad global en la que no hay ningún lugar ni grupo que pueda mantenerse al margen de los demás; con ello desaparece una de las premisas fundamentales de la modernidad: la idea de vivir y actuar en los espacios cerrados y recíprocamente delimitados de los Estados

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

nacionales y de sus respectivas sociedades nacionales (Bek,1998, p.20).

Sin embargo, se hace necesario retomar la lógica de las valoraciones políticas que justifican la acción estatal, porque la ausencia de estas ha permitido que la mundialización de la economía presidida por la lógica del cálculo y el beneficio estrictamente económico se ha adueñado de la historia. Se convierte el crecimiento económico en un fin en sí mismo, sin tener en cuenta sus efectos colaterales, fundamentalmente medioambientales y sociales, y sin conseguir la disminución de la pobreza, en la que las mujeres son las más afectadas. Las políticas económicas neoliberales tienen efectos especialmente perversos para diversas zonas del planeta y para ciertos colectivos sociales, en el sentido de que generan exclusión para quienes no tienen acceso a los recursos informacionales y empobrecen a los que no poseen la cultura necesaria para integrarse en el polarizado mercado laboral (Cobo, 2010, p.271), aumentando la desigualdad de género y sobre todo la pobreza de las mujeres.

A lo anterior hay que añadir que la universalización de la economía discurre en la más amplia de las impunidades, siendo un poder, aunque como tal no se reconozca. Es por tanto un poder oculto, no sometido a ningún tipo de control.
La obligada conversión en ciudadanos y ciudadanas del mundo por imperativo de la lógica del mercado no puede producirse a costa de la renuncia de la condición de ciudadanía en la órbita política del Estado, dentro de la cual la persona es, ante todo, portadora de unos derechos que en todo momento puede hacer valer frente al poder y que no deben diluirse en el fenómeno de la globalización.

Sin embargo, frente a esta posición, un tanto catastrofista o negadora de la posibilidad de intervención en cambiar el curso de los acontecimientos, cabe esgrimir que el núcleo de los estados democráticos de derecho responde a valores y principios universalistas que podemos encontrar en la actualidad plasmados

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

en las múltiples dimensiones de la globalización. Por decirlo de alguna manera, no hay ningún impedimento lógico para que al igual que en su momento se dio un orden democrático estatal, pueda darse ahora una democracia cosmopolita, un orden político que encauce de nuevo la economía dentro de las exigencias de la justicia social.

Se hace necesario introducir el debate sobre la necesidad del Estado y rescatar el principio democrático, aunque reubicado en un espacio diferente. Un análisis de las dimensiones del poder, de su naturaleza compleja como capacidad para la definición y satisfacción de intereses particulares, comunes y generales, nos mostraría la implicación de la dimensión económica (Lukes, 1998, p.53). En este sentido se puede afirmar que nos encontramos de nuevo en una continuación del proceso de construcción de la ciudadanía, incorporando aquellas novedades producto de la globalización.

El derecho constitucional y la teoría de la constitución deben retomar tres ideas constantes de la dialéctica interna del pensamiento roussoniano: la libertad política, el cuerpo social o Estado y la idea de internacionalismo o cosmopolitismo (De Vega, 1998, p.53) a los que habría que añadir a las mujeres como sujetos políticos del cuerpo social. Pero deberían dejarse atrás los esquemas del pasado y adaptados a la nueva realidad, porque no se puede operar con los mismos esquemas. El análisis debería producirse a través de esas ideas, pero teniendo en cuenta todas las particularidades que implica la mundialización del mercado y que necesariamente se interrelacionan y afectan a cada una de las ideas.

El problema no es optar entre democracia o economía, se trata más bien de una relación de fines y medios. La economía tiene su propia lógica que, en todo caso, debería subordinarse a la capacidad de tomar decisiones, en definitiva, a la participación política, en cuyo ámbito debería decidirse qué debe ser producido

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

y cómo, cuáles son las prioridades en la satisfacción de las necesidades y cómo pueden distribuirse las cargas y los beneficios sociales, ecológicos etc.

Este nuevo escenario supone romper con la idea clásica del Estado y de la soberanía y apuntar las líneas básicas de un concepto de soberanía democrática. El elemento que realmente se ha visto afectado es el territorio, que estaría definido por la magnitud de los problemas, esto es, por la extensión de las personas afectadas y no por las fronteras del Estado, a la vez que por la exigencia del reconocimiento de los derechos humanos como marco mínimo de convivencia impuesto por el criterio de justicia (Habermas, 2005, p.112).

La teorización y el debate del constitucionalismo multinivel y su contexto global constituye un espacio en permanente construcción (Tur, 2020, p.72) que se ha visto incrementado en este siglo; así, se van apuntando tendencias sobre un modelo de Estado constitucional global, producto de la evolución del Estado desde la Segunda guerra mundial a un Estado constitucional internacionalista, pasando por un Estado Constitucional cooperativo (Habërle, 2013, p.256). Una de las tendencias, denominada la escuela pluralista, propone la identificación y formulación de procesos constitucionales más allá del Estado y que clasifica las contribuciones en cuatro dimensiones: social, institucional, normativa y analógica (Jiménez Alemán, 2019, p.144). Dentro de esta clasificación, este trabajo se podría situar en la denominada dimensión normativa, tratando de identificar las normas fundamentales en vigor en el ámbito internacional, que constituirían el marco de un orden constitucional global desde una perspectiva de género, concretamente en el ámbito de Naciones Unidas.

No obstante, este planteamiento, y a los efectos de este trabajo, entendemos que constitucionalismos y pluralismo no son visiones estructurales antagónicas (Rodrigo, 2013, p.63). El derecho internacional sobre la igualdad de mujeres y hombres se ha convertido es un sistema jurídico pluralista que ha ampliado el

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

derecho de los Estados y sus instituciones de control. Este avance normativo debería ser incorporado a una Constitución para la humanidad, partiendo de la existencia de un Estado mundial, no tanto en el sentido formal del término sino en el sentido material, esto es, un poder político con capacidad para hacer cumplir las normas en el sentido Kelseniano del término, con la capacidad de establecer sanciones para los actos antijurídicos (Jiménez, 2019, p.147). No es el cometido de este artículo analizar las diferentes propuestas de articulación de un Estado mundial estructurado como un *multilevel constitutionalism* o una aplicación de la lógica de la subsidiariedad y de coorganización (Pinon, 2020, p.169), pero sí insistir en la falta de un poder político global que profundice en la idea de igualdad real y efectiva.

No se trata de renunciar al Estado ni de sustituir los gobiernos o eliminar las autonomías por las decisiones de un Gobierno mundial. Más bien al contrario, se trata de reforzar la toma de decisiones en todos aquellos niveles en que sea posible una participación directa, para que puedan ser más efectivas las decisiones en esferas superiores. Soberanía democrática y ciudadanía cosmopolita son la clave de la globalización (Garcia-Marzá, 1994, p.56), sobre la base de la incorporación de los derechos humanos y también de los sociales, presididos por el principio de igualdad de mujeres y hombres.

5. CONTENIDO MÍNIMO DE UNA CONSTITUCIÓN PARA LA HUMANIDAD: LAS APORTACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES.

5.1 Globalización y Poder político: las condiciones de igualdad

La actualidad del mundo globalizado requiere también de un poder político globalizado que sea capaz de armonizarlo y conferir un bienestar a la ciudadanía, eliminando las diferencias tan abismales de unos Estados a otros. Tales brechas

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

impiden a la ciudadanía de los países en vías de desarrollo vivir en condiciones de dignidad y abocan a una gran parte de la de los países avanzados a vivir en una zozobra constante ya que no se puede disfrutar del bienestar al que se tiene acceso si la mayor parte de la ciudadanía del mundo vive en malas condiciones. Qué duda cabe que existen muchos aspectos que requieren de esa intervención global para hacer un planeta más habitable: la ecología, la miseria y el hambre, la catástrofe nuclear, las guerras (Ferrajoli, 2022, p.127), la discriminación de las mujeres y también la Inteligencia Artificial, que necesita de unos controles globales para no incrementar las desigualdades (Senent y Ventura, 2023). Sin duda todas estas circunstancias y, seguramente alguna más, necesitan de una intervención a nivel global. En relación con ello, son muchas las contribuciones doctrinales realizadas alrededor de la necesidad de una Constitución global y sobre si ésta tiene que ir acompañada de un Estado; o quizá también se podría dar una Constitución sin Estado, dado el avance del ordenamiento jurídico internacional. La posición que se mantiene en este artículo es la necesidad de una Constitución global y de un Estado también global plural, en el sentido material del término, tal y como se ha señalado anteriormente partiendo, eso sí, de los avances realizados en el derecho internacional sobre la igualdad de mujeres y hombres y la no discriminación.

Partimos de la base de la necesidad de una armonización global también desde el punto de vista de las mujeres y por ello se propone que los Tratados y convenciones internacionales sobre igualdad y no discriminación pasen a formar parte de la futura Constitución global, no en toda su amplitud, porque resultaría imposible, pero si en cuanto a los fundamentos y las ideas básicas que en ellos se desarrollan. Tal Constitución incorporaría las ideas que fundamentan los Tratados internacionales en relación a la igualdad de mujeres y hombres representando el *ius cogens* como contenido mínimo de una Constitución para la humanidad. Las mujeres, que son la mitad de la humanidad, viven en condiciones de discriminación en todos los países del mundo, incluso en aquellos

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

que se pueden considerar como más cumplidores de los derechos humanos y con niveles de subsistencia óptimos.

Las mujeres en todos los países del mundo, aunque en diferentes grados de intensidad, están en condiciones de desigualdad en la participación política, en el trabajo, en la educación, tienen problemas con su sexualidad, sufren violencia de género, asumen las tareas de conciliación, son traficadas para ejercer la prostitución, y un largo etcétera que hace necesario replantearse estás cuestiones en un pensamiento globalizador de un futuro, y deseable, Estado Mundial.

Las diferentes posiciones de hombres y mujeres se pueden constatar en múltiples estudios realizados por organizaciones internacionales como ONU Mujeres, Organización mundial de la salud, Unión interparlamentaria y Organización internacional del trabajo. Por su especial significancia podemos señalar los datos de violencia contra las mujeres a nivel global, que son escalofriantes: se calcula que en todo el mundo 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de los hombres. Estos datos añadidos a las problemáticas que necesitan acciones y de una regularización global nos inclinan a pensar que la acción de los Estados es insuficiente. Se necesita una cobertura constitucional mundial, capaz de articular un sistema de garantía de los derechos fundamentales de las mujeres, para convertirlos en verdaderos derechos humanos y volver así a la concepción naturalista de que toda persona, por el hecho de serlo, tiene derechos.

Fruto de la situación de discriminación que sufren las mujeres se han ido aprobando algunos Tratados internacionales, ratificados por muchos de los Estados del mundo, cuya pretensión es definir conceptos, establecer mecanismos para solucionar la discriminación y crear obligaciones a los Estados firmantes para su cumplimiento. Todos estos tratados están relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

Como se ha señalado anteriormente, a lo largo de la historia del surgimiento de los Estados Constitucionales las mujeres no han sido incluidas como sujetos políticos, lo que ha supuesto que la mitad de las actividades de la humanidad no hayan sido objeto de regulación y de protección de sus derechos. Esta mitad de las actividades, que han ejercido las mujeres en todo el mundo, han pasado a la titularidad del poder directo del patriarcado, sin ninguna protección para las personas que las desarrollaban que en una aplastante mayoría eran y son mujeres. La separación de la esfera pública y privada no se modifica con la llegada del Estado liberal, origen del constitucionalismo; lo que si produce una profunda transformación en las relaciones de poder en el espacio público es el reconocimiento del nuevo sujeto de la soberanía debido a la traslación del poder del soberano a la soberanía nacional (Esquembre, 2016, p.193). El ámbito privado/doméstico se refuerza y pasa a ser una esfera no regulada, en la que el poder lo ejerce el patriarcado blindado por las Constituciones, que regulan y protegen como derechos fundamentales la inviolabilidad del domicilio, el lugar que merece una especial protección por ser el espacio más idóneo para el ejercicio de la libertad individual.

La exclusión de este espacio doméstico de la vida pública y sobre todo de la regulación jurídica y su reconocimiento, y ya no únicamente el espacio sino también las actividades que allí se realizan, básicamente por las mujeres, ha supuesto un obstáculo para que ellas tuvieran condiciones de igualdad, no solamente en el ámbito privado sino también en el público, porque toda la actividad que desarrollaban en aquél las sitúa en condiciones de desigualdad en el ámbito público (en el trabajo, la política, etc.). Sin embargo, desde el punto de vista económico y del bienestar no se entiende esta falta de consideración de la actividad desarrollada en el ámbito privado/doméstico porque según las economistas feministas (Benería, 2018, p.132) el mundo no podría funcionar sin los trabajos desarrollados por las mujeres en los cuidados. Esto no sólo las ha

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

perjudicado a ellas sino también al interés que algunos hombres pudieran tener en realizar esas actividades, porque al ser desvalorizadas económica y socialmente, las convierten en poco atractivas, y solo aquellos que tienen una conciencia de la igualdad y por razones de solidaridad participan de esas actividades.

5.2 La dignidad de mujeres y hombres

Recientemente se han realizado algunas propuestas de una Constitución mundial (Ferrajoli, 2022); más concretamente, una Constitución de la Tierra, en la que, siguiendo la estructura de las Constituciones Estatales, se establece una parte dogmática de reconocimiento de derechos y una parte orgánica dónde se regulan las instituciones de gobierno y de garantía para, asegurar y hacer cumplir los derechos de la Constitución. No obstante, el indudable mayor interés de esta propuesta radica en lo que respecta al sujeto de la Constitución. Al igual que ocurre en las respectivas Constituciones de los diferentes Estados, se utilizan los genéricos «personas» o «seres humanos», sin distinguir la composición de esa humanidad que, como se ha desarrollado en este trabajo, está formada por hombres y mujeres. Evidentemente ellos y ellas son personas, pero no tienen posiciones equivalentes en la sociedad y esta desigualdad de la mitad de la humanidad, las mujeres, tampoco se visibiliza en el artículo referido al principio de igualdad, el artículo 4: "la igualdad en los derechos fundamentales comporta el derecho de cada uno al respeto y la afirmación de sus diferencias personales de identidad y a la máxima reducción de las desigualdades económicas y sociales" (Ferrajoli, 2022, p.139).

Entendemos que solo si las mujeres son reconocidas expresamente como un sujeto en igualdad de derechos y obligaciones que los hombres puede redimensionarse el terreno jurídico para, por un lado, ampliar sus márgenes a ciertas esferas previamente excluidas; y, como consecuencia de ello, disolver o al menos difuminar la división público/privado que está en la base de cualquier

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

regulación legal, tal y como ha sucedido con el Derecho Constitucional de los Estados. Sin una reconceptualización de tal sujeto que reconozca su manifestación como mujeres y hombres, homologue sus diferencias y las equipare en el reconocimiento y el ejercicio de derechos y obligaciones, resulta imposible garantizar su igualdad real y efectiva (García y Ventura, 2018).

La propuesta de una Constitución mundial desde los posicionamientos feministas debería estar presidida por los principios de igualdad de mujeres y hombres y consecuentemente del principio de paridad. No tendría sentido que después de los avances realizados en muchos de los países del mundo no se incluyeran los mismos en una Constitución para articular un sistema mundial más justo y no discriminatorio para las mujeres. Estos avances no solo afectarían a las mujeres, la mitad de la humanidad, sino a todos los grupos que sufren algún tipo de discriminación dado que la extensión de la igualdad pone en cuestión todas las desigualdades, así como a las discriminaciones a las que dan lugar y por ello beneficia a todos los grupos discriminados.

Lo primero que debería incluirse en la nueva Constitución, a nuestro entender, es la concreción del sujeto político y significar que la humanidad está formada por hombres y mujeres. Pero no es suficiente con esta mención porque, tal y como se ha señalado anteriormente, las mujeres no solo quedaron excluidas como sujetos políticos, sino que también todo el ámbito y las actividades que ellas desarrollaban, de especial trascendencia para la vida y la dignidad de las personas quedaron excluidos. Su inclusión no debe estar ligada a las mujeres ni tampoco a los hombres, pero tiene que reconocerse a nivel constitucional; y ello significa que en la parte dogmática deben incluirse derechos relacionados con estas actividades, tales como los derechos relacionados con el cuidado de las personas (Marrades, 2016, p.215).

La dignidad humana es un presupuesto básico de los derechos humanos y si bien

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

no resulta fácil acotar este concepto, la economía feminista ha desarrollado una extensa teoría sobre la propuesta de un modelo económico que garantice la digna calidad de vida para toda la humanidad. Es evidente que para tener un mínimo de dignidad se requieren de una serie de condiciones: alimentarias, de limpieza, de vivienda, educativas de sanidad, etc. (Ventura, 1999, p.236). Y esto nos lleva a la necesidad de reconocer los cuidados que han venido desarrollando las mujeres de forma no remunerada y que han permitido a los hombres tener condiciones de dignidad. La Constitución debe incluir como un derecho la idea de que la dignidad de las personas está vinculada a tener unas condiciones de cuidado que permitan el desarrollo de la personalidad en condiciones de dignidad. Esta parte, que fue excluida de los derechos humanos por ser una actividad vinculada al ámbito doméstico desterrada de lo público y por ser un trabajo asumido mayoritariamente por mujeres (Shafik, 22, p.53), sigue siendo la base para el desarrollo de la dignidad de las personas.

Por ello, una Constitución para la humanidad debe partir del reconocimiento de un sujeto formado por mujeres y hombres que conforman la humanidad y cuya dignidad de la persona sea presupuesto fundamental para el desarrollo de los derechos.

El reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos debería presidir todo el texto constitucional. Para ello será necesario que en cada uno de los artículos en que se incluya por primera vez la referencia a la humanidad, a la ciudadanía, a la persona, deberían comenzar con la inclusión de este nuevo sujeto. En teoría ya está incluido en los genéricos antes mencionados pero la práctica demuestra que ello no es o. Hasta tal punto esta exclusión es real, a pesar de toda una corriente doctrinal que defiende lo contrario, que Naciones Unidas lo ha reconocido en su Conferencia mundial de Viena de 1993. Cabe recordar en este sentido que la Declaración universal de Derechos Humanos es del año 1948 y no es hasta el año 1993 que en la Conferencia de Viena se declara que los derechos de las mujeres

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

son derechos humanos (art.18). En esta última Conferencia mundial se llega a la conclusión, después de un largo recorrido y de grandes debates, de que hasta entonces los derechos humanos no protegían a las mujeres y por ello en la Declaración se realiza esa afirmación. Se podría decir que los derechos humanos eran derechos humanos solo de los hombres (Facio, 2016, p.59). Reconocer este hecho no significa que cambie radicalmente la estructura social que discrimina a las mujeres, pero sí que les da instrumentos de garantía para ir modificando la realidad y empoderamiento.

Otro de los conceptos que deberían incluirse en esta nueva Constitución es el derecho a la igualdad y la no discriminación. El concepto de igualdad debe excluir la discriminación y por ello se ha de hacer una mención especial al concepto de discriminación que regula el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. En su preámbulo se explican las razones y su necesidad; y se refiere a la Carta fundacional de Naciones Unidas y a otros instrumentos internacionales que subrayan la promoción de la igualdad para las mujeres como uno de los principios centrales de la organización. Recuerda también que, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, la discriminación contra las mujeres aún existe y supone una clara violación de la igualdad de derechos y del respeto a la propia dignidad. También recuerda que la discriminación contra las mujeres es un obstáculo para su participación en las mismas condiciones que los hombres en la vida política, social, económica y cultural de su país, lo que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicios a su país y a la humanidad. La máxima participación de la mujer en condiciones de igualdad en todos los campos es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz (Duran, 2023, p.88). En base a ello, la nueva Constitución debería incluir en el artículo dónde se recoge el principio de igualdad de mujeres y hombres la no

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

discriminación en el sentido que se señala en el artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.

Una vida digna implica la ausencia de violencia, es decir una vida libre de violencia. La violencia contra las mujeres en el mundo es muy alta: como hemos visto anteriormente, Naciones Unidas señala que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia de género. Esta situación llevó a que el 20 de diciembre de 1993 se firmara la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, siendo una de las consecuencias de la Conferencia de Viena. En ella la Asamblea general reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a las mujeres de los derechos y principios relativos a la igualdad, la seguridad, la libertad, la integridad y la dignidad de todos los seres humanos. Se explicita que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y que impide total o parcialmente a las mujeres gozar de dichos derechos y libertades; y se muestra preocupación por el descuido de larga data de la protección y fomento de esos derechos y libertades en casos de violencia contra la mujer (Preámbulo). El concepto de dignidad de la Constitución global debería también incorporar el reconocimiento de que la humanidad tiene derecho a vivir una vida digna sin violencia de género y cualquier otro tipo de violencias.

5.3 Derechos de conciliación

El no reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos en las constituciones de los respectivos Estados del mundo ha traído como consecuencia que todos los trabajos relacionados con los cuidados que desarrollan de forma mayoritaria las mujeres formaban parte del ámbito doméstico, excluido de la consideración de regulación por no ser materia constitucional. Sin embargo, tal y como se ha señalado anteriormente, son esenciales para la dignidad de la persona y como tal deben ser incluidos como derechos al cuidado (Marrades, 2016, p.241), desvinculados de si son propios de mujeres u hombres; resulta por ello

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

imprescindible su reconocimiento en la Constitución para la humanidad. Esta Constitución debe asumir nuevos derechos que son comunes a todos los países del mundo porque son susceptibles de garantizar el bienestar y la dignidad de la humanidad.

Tal y como señala ONU Mujeres los cuidados son aquellas actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas y que incluye las tareas cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida, como: el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, la educación/-formación de las personas, el mantenimiento de las relaciones sociales o el apoyo psicológico a los miembros de la familia −ONU Mujeres y CEPAL año 2020−. El derecho al cuidado tiene una doble dimensión por una parte es un derecho de las personas, pero también es una función o tarea a desarrollar por algunas personas (Marrades Puig, 2016, p.242). El pacto sobre una Constitución mundial debe considerar la sostenibilidad de la vida y la reproducción social (Miranda y Rotstein, 2021, p.2).

Esta idea está contemplada en algunas de las Constituciones más recientes (Ciudad de México, Ecuador, y en el proyecto de Constitución Chilena de 2022) pero todavía es más un debate doctrinal que una realidad constitucional. Sin embargo, entendemos que sería una consecuencia lógica de la inclusión de las mujeres como sujeto político, mientras que el sujeto interiorizado en las constituciones en vigor en los diferentes estados es un sujeto individual y autosuficiente, que no requiere cuidados y que actúa en el ámbito público y económico sin demasiadas necesidades (Carrasco, 2021, p.22). La arquitectura institucional que sustente la gobernanza a nivel mundial tiene que fundamentarse en los derechos humanos, que reconocen la igualdad y no discriminación y ciertos principios como la universalidad, entendida como la provisión de satisfacción de la persona (Camila Troncosa, 2022) alcance a toda la humanidad. Así, el derecho de la persona a cuidar y ser cuidada resulta de suma

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

importancia para su dignidad y el desarrollo de la personalidad. Seguramente, el reconocimiento constitucional incrementará su importancia y contribuirá a que no se vincule directamente a una actividad que realizan casi en exclusiva las mujeres, porque a pesar de que en muchos países algunos de estos cuidados se han profesionalizado y se han extendido a ámbitos fuera del hogar apenas ha cambiado el sexo de las personas que suelen hacerse cargo de cuidar (Camps, 2012, p.45).

5.4 El principio de paridad.

Otra cuestión de suma importancia para la propuesta de una Constitución para la humanidad es el principio de paridad, entendida como una consecuencia lógica del cuestionamiento liberal del sujeto constitucional y la reconceptualización del sujeto político, incluyendo a la mitad de la humanidad en ese nuevo sujeto omnicomprensivo de mujeres y hombres. La manera de entenderlo es algo diferente a los debates que se han planteado en torno a la democracia paritaria, bien si se trata de compensar una desigualdad histórica de las mujeres o toda la problemática creada, incluso en las Sentencias de algunos Tribunales Constitucionales, acerca de si el reconocimiento del sujeto mujer rompe con el concepto de representación de la soberanía, si las mujeres se tienen que representar a ellas mismas, etc. La cuestión de la paridad está vinculada al nuevo sujeto que entraría en juego a partir de su reconocimiento, pero cabría añadir que esta paridad tiene que entenderse de manera transversal y afectar a todos los órganos de la nueva Constitución y para todo el funcionamiento institucional y participativo de la sociedad. Las mujeres deben y pueden participar en todos los ámbitos de la sociedad sin ningún tipo de restricciones, en justo equilibrio con los hombres, no para representarse a ellas mismas sino para que los órganos y las organizaciones sociales tengan una representación de la humanidad y no solo de la mitad de ella, los hombres. La paridad supone la radicalización de la propia idea de democracia puesto que las mujeres y los hombres constituyen a partes iguales la humanidad y en justa correspondencia

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

los órganos constitucionales deberían reflejar esa composición (Reche, 2022, p.482).

Esta propuesta se ve respaldada en el ámbito internacional, entre otras, por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación CEDAW de 1979 (arts 3 y 7). La Recomendación general número 23 del Comité de la CEDAW señala la importancia de la mujer en la vida pública, al igual que otras Convenciones y Declaraciones, como la Declaración universal de derechos humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, la Convención sobre los derechos políticos de la Mujer, la ya citada Declaración de Viena, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing); y por ello insta a los Estados parte (antecedente 4 de la Recomendación) a adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación de la mujer en la vida política y pública del país.

En el comentario nº 8 de esta Recomendación General se señala que la esfera pública y privada de la vida humana siempre se han considerado distintas y se han reglamentado en consecuencia. Invariablemente, se han asignado a la mujer funciones en la esfera privada o doméstica vinculadas a la procreación y la crianza de los hijos mientras que en todas las sociedades estas actividades se han tratado como inferiores. En cambio, la vida pública que goza de respeto y prestigio, abarca una amplia gama de actividades fuera de la esfera privada y doméstica. Históricamente, el hombre ha dominado la vida pública y a la vez ha ejercido el poder hasta circunscribir y subordinar a la mujer al ámbito privado.
Desde la Declaración de Atenas de 1992, que define la democracia paritaria como un concepto de sociedad integrada a partes iguales por mujeres y hombres (Sevilla,2004, p.21), pasando por la Plataforma de Beijing de la IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer de 1995, los Objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 (5.5.c) así como otras muchas de cada uno de los ámbitos regionales del mundo, debemos entenderla como una consecuencia del reconocimiento de una humanidad formada por mujeres y hombres en condiciones de igualdad. No

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

se trata pues de una medida transitoria ni compensatoria de desigualdades anteriores sino de una nueva concepción de la democracia, resituada en un ámbito global, esto es, la democracia paritaria para la humanidad.

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607

6. BIBLIOGRAFÍA

Alonso, I., & Belinchón, M. (1989). *La voz de las mujeres en la Revolución Francesa (1789-1793)*. Lasal.

Amorós Puente, C. (2004). *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para la emancipación de las mujeres*. Cátedra.

Beck, U. (1998). *¿Qué es la globalización?* Paidós.

Benería, L. (2003). *Gender, development, and globalization: Economics as if all people mattered*. Routledge.

Campos Rubio, A. (2020). Teoría del Estado y del Derecho: Una revisión crítica desde la teoría feminista. En A. Ventura Franch & M. Iglesias Bárez (Coords.), *Manual de Derecho Constitucional Español con perspectiva de género* (pp. 27-48). Universidad de Salamanca.

Camps, V. (2021). *Tiempo de cuidados: Otra forma de estar en el mundo*. Arpa.

Carrasco, C. (2021). Capitalismo neoliberal: ¿Cómo situamos a los cuidados? En *Juntas en Acción y CEM*, *Las tramas del cuidado en la nueva Constitución* (pp. 21-27). Juntas en Acción. https://comunidadmujer.cl/wp-content/uploads/2022/04/Las-tramas-del-cuidado-en-la-nueva-Constitucion.pdf

De Vega García, P. (1988). Mundialización y Derecho Constitucional: La crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual. *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, *100*, 13-56.

Durán y Lalaguna, P. (2003). *Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres*. Ediciones Olejnik.

Esquembre Cerdá, M. (2016). Las mujeres ante el cambio constitucional: Algunos apuntes desde una perspectiva feminista para una reforma constituyente de la Constitución Española. *Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas*, (1).

Esquembre Cerdá, M. (2018). El reconocimiento de las mujeres como sujetos jurídico-políticos en la Ley de Igualdad. En A. Ventura y S. García (Eds.), *El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Una evaluación de la Ley Orgánica 3/2007* (pp. 91-117). Aranzadi.

Facio, A. (2016). *Los derechos de las mujeres son derechos humanos*. Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31195.pdf

Figueruelo Burrieza, Á. (2017). El tríptico liberal y la globalización. *Revista General de Derecho Público Comparado*, *20*.

García Campá, S., & Ventura Franch, A. (2021). El nuevo concepto de igualdad de mujeres y hombres en el ordenamiento jurídico español: Su aplicación en el ámbito laboral a través de las acciones positivas y la corresponsabilidad. *Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho al Empleo*, *9*(2).

García-Marzá, D. (1994). *Teoría de la democracia*. Nau.

García-Marzá, D., & Calvo, P. (2024). *Algorithmic democracy: A critical perspective based on deliberative democracy*. Springer Nature.

Habermas, J. (1999). *La inclusión del otro: Estudios de teoría política*. Paidós.

Habermas, J. (2005). ¿Es posible una constitución política para la sociedad mundial pluralista? *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, *39*, 107-119. https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/1029

Häberle, P. (2013). *Estado constitucional cooperativo: Desde la cultura y como cultura*. Duncker & Humblot.

Jiménez Alemán, Á. (2019). El constitucionalismo global: ¿Neologismo necesario o mera cacofonía? *Revista Española de Derecho Constitucional*, *117*, 139-166.

Lovenduski, J. (1997). Feminismo institucional: Género y Estado. En E. Uriarte (Coord.), *Mujeres y política* (pp. 201-220). Ariel.

Lovenduski, J., Baudino, C., Guadagnini, M., Meier, P., & Sainsbury, D. (2005). Conclusiones: Feminismo estatal y representación política. En J. Lovenduski (Ed.), *Feminismo de estado y representación política* (pp. 260-293). Cambridge University Press.

Lukes, S. (1985). *El poder: Un enfoque radical*. Siglo XXI.

MacKinnon, C. A. (1995). *Hacia una teoría feminista del Estado*. Cátedra.

Marrades Puig, A. (2016). Los nuevos derechos sociales: El derecho al cuidado como fundamento del pacto constitucional. *Revista de Derecho Político*, *97*, 209-242.

Miranda, C., & Roitstein, M. (2021). *Los cuidados al centro de la nueva constitución*. Fundación Nodo XXI.

Pateman, C. (1995). *El contrato sexual*. Anthropos.

Pinón, S. (2020). Las incertidumbres del constitucionalismo global. *UNED. Teoría y Realidad Constitucional*, *46*, 141-172.

Reche Tello, N. (2022). Democracia paritaria y debates sobre la paridad en el proceso constitucional chileno: Desafíos para el futuro. *IgualdadEs*, 7, 475-510. https://doi.org/10.18042/cepc/IgdES.7.05

Rodrigo, Á. J. (2013). El pluralismo del constitucionalismo internacional. *Anuario Español de Derecho Internacional*, *29,* 61-109.

Rubio Castro, A. (2006). *Lo público y lo privado en el contexto de la globalización*. Instituto Andaluz de la Mujer.

Senent Vidal, M. J., & Ventura Franch, A. (2023). Aplicación de la perspectiva de género a la regulación de los sistemas de inteligencia artificial. En E. González-Esteban & J. C. Siurana Aparici (Eds.), *Inteligencia artificial: Concepto, alcance, retos* (pp. 347-375). Tirant lo Blanch.

Sevilla Merino, J. (2004). *Mujeres y ciudadanía: Democracia paritaria*. Editorial Universidad de Valencia.

Shafik, M. (2021). *Lo que nos debemos unos a otros: Un nuevo contrato social*. Paidós.

Tur Ausina, R. (2020). Constitucionalismo multinivel e igualdad efectiva de mujeres y hombres. En A. Ventura Franch y M. Iglesias Bárez (Coords.), *Manual de Derecho Constitucional Español con perspectiva de género* (pp. 27-48). Universidad de Salamanca.

Ventura Franch, A. (1999). *Las mujeres y la Constitución Española*. Instituto de la Mujer.

Wollstonecraft, M. (1994). *Vindicación de los derechos de la mujer*. Ediciones Cátedra.

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-35
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.11607